

Globethics Repository



Venezuela 1989-1994

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Marta Sosa, Joaquín
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-07-12 21:23:38
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/220310

Venezuela 1989-1994. Cambios, elecciones y balas

Marta-Sosa, Joaquín

Joaquín Marta Sosa: Politólogo venezolano. Profesor universitario en ciencias políticas. Analista político en prensa escrita y televisión.

*Los golpes de Estado constructivos son,
en realidad, tan raros como los unicornios*

The New York Times

Una presidencia en el ojo del huracán

Cuando el primer domingo de diciembre de 1988 Carlos Andrés Pérez obtiene por segunda vez la Presidencia de Venezuela, ni él ni nadie supuso la dimensión de la tormenta en la que nos adentrábamos.

Pérez gana las elecciones presidenciales con el 54% de los votos. Pero su partido, Acción Democrática (AD) - vagamente socialdemócrata - por primera vez, logrando la presidencia pierde, no obstante, la mayoría parlamentaria. AD junto con COPEI blandamente socialcristiano -, capitalizan el 95% de los votos presidenciales y sólo el 74% de los votos para la configuración del Parlamento. Fuerzas como el Movimiento al Socialismo (MAS) - con un programa de socialismo democrático cada vez menos preciso -, Causa Radical (Causa R) - grupo emergente de carácter sindical-protestatario - y otras de naturaleza ocasional se convierten en fuerzas cuyas posiciones, por el equilibrio entre AD y COPEI, pasaron a ser decisivas. La abstención electoral rondó el 18%, la más alta en la historia de las elecciones generales en Venezuela. Es decir, el mapa político, los posicionamientos y las fuerzas en ese mapa comienzan a ser distintos. Lo que pasó luego no debía sorprendernos demasiado.

En los primeros días de gestión (febrero de 1989) el gobierno se percató de que el peso de la deuda externa es mayor, que las reservas internacionales apenas si existen, que hay compromisos financieros del sector público que, de cumplirse, conducirían a la bancarrota en cuestión de segundos, que hay una inflación contenida cercana al 60%, que el bolívar está sobrevaluado, acaso, en más del 300%. Para completar el recuerdo de esas condiciones de partida, desde el año de 1987 se había registrado algo más de un centenar de «huelgas salvajes» y aproximadamente

ochenta casos de «insubordinación civil» de diverso tipo. Es decir, el modelo económico convencional era infianciable, el mapa político estaba muy atomizado y la vida social había dado suficientes muestras de agitación.

Por otra parte, los agentes tradicionales de intermediación y de control - partidos, sindicatos - estaban en su peor momento de legitimidad; el Estado empobrecido y cada vez menos eficiente carecía de capacidad dirigente; los sectores empresariales iniciaban una escalada de pugnacidad - para cambiar la estructura económica y, por sobre todo, para hacer que fuesen otros los que pagaran los costos del cambio -; y los diversos movimientos de la sociedad civil - vecinales, regionales - intensifican sus presiones para cambiar la estructura política y reducir de ese modo «la colonización» de los partidos sobre la vida social. Era un cuadro cuya complicación y peligrosidad salta a la vista.

27 de febrero: el «gran viraje» de verdad

Las primeras medidas del gobierno crearon de inmediato serios problemas de gobernabilidad democrática. Al construir su cuerpo de ministros con un numeroso grupo de profesionales prestigiosos pero alejados del partidismo y, en particular, de AD, el presidente Pérez reduce sin solución de continuidad los apoyos políticos que un programa como el que se iba a acometer necesitaba de manera prioritaria y perentoria.

Se supuso que la realidad obligaba a tal ajuste severo, que no había ni salidas ni programas alternativos, que el asumido tenía, «por su lógica, necesidad y verdad» intrínsecas, fuerza suficiente de persuasión y de realización. Esto, a la corta, provocó inflexibilidades y limitaciones en el programa gubernamental, las cuales crearon varios cuellos de botella en el camino de su viabilidad, en especial el de los «costos sociales».

El primero de ellos fue la «insurrección civil» del 27 de febrero de 1989, apenas iniciado el gobierno. Este hecho produjo una consecuencia de la que el presidente Pérez no se pudo librar en adelante: la impopularidad social y política que se tradujo en caída de su capacidad de negociación y, por lo tanto, en la imposibilidad de formar consensos suficientemente fuertes y estables como los que se necesitaban. Pero tal insurrección lo que demostraba era otra cuestión mucho más profunda y drástica: la democracia populista, bajo el control de grandes partidos de masas, tocaba a su fin. El 27 de febrero dejó en evidencia que la política había dejado de ser el reino de los partidos, que el Estado distribuidor agonizaba y que los controles conven-

cionales sobre la sociedad ya no existían y, lo más interesante, ella se había dado cuenta.

La abstención como alerta roja

El año de 1989 termina con una inflación del 81% y con una abstención del 54,8% en las primeras elecciones de gobernadores y de alcaldes. AD gana 11 gobernaciones y más de 100 alcaldías. COPEI obtiene 7 gobernaciones y unas 80 alcaldías. El MAS triunfa en 1 gobernación y logra cerca de 15 alcaldes. Causa R también sale victoriosa en 1 gobernación.

La abstención es el fenómeno electoral. Pero también lo es, aun cuando con baja, muy baja intensidad, el crecimiento y posición institucional de dos fuerzas (MAS y Causa R) tradicionalmente no invitadas a tomar asiento en el Estado. La abstención constituyó, y así lo revelaron estudios de opinión, la protesta contra el gobierno y, también, contra el conjunto de los protagonistas del sistema político. La ilegitimidad de ellos subía otra vez de nivel. La ausencia de una referencia que organizara y diera sentido a ese descontento eran un buen dato para las fuerzas antidemocráticas que subsistían en Venezuela y que, en lo tocante al mundo militar, se venían organizando como logia desde 1983, año del segundo centenario del nacimiento de Simón Bolívar. De allí su denominación: MBR-200 (Movimiento Revolucionario Bolivariano Doscientos).

En términos políticos, AD bajó sustancialmente, aun cuando se mantuvo como la primera mayoría. Esto enajena todavía más sus relaciones con el gobierno, a cuyo programa económico atribuye su retroceso electoral. Los medios de comunicación comienzan a escalar hacia su conversión en un auténtico poder político, encontrando lugar en los vacíos que dejan los partidos y otras organizaciones tradicionales y en el descontento social del cual se convierten en voceros sistemáticos (en algunos casos de manera amarillista y en otros por claros intereses políticos de grupo).

Una batalla que el gobierno no había dado, la de la opinión pública, comienza a ser perdida de manera cada vez más estrepitosa a partir de la debacle que para el «punto fijismo» (el acuerdo tácito entre AD y COPEI para monopolizar siempre el escenario político e institucional) significó el balance político de esas elecciones, verdadero alerta roja para el sistema. Si a ello añadimos la creciente ola de noticias, informaciones y denuncias sobre actos de corrupción, las tensiones internas en los partidos históricos, la confrontación entre los distintos sectores empresariales por posicionarse en el nuevo espacio de economía abierta y de mercado, la ausencia de

un movimiento sindical preparado para enfrentar una situación socioeconómica inédita, es fácil concluir que, otra vez, la víctima de este escenario era la gobernabilidad democrática.

1992: el año sin desperdicio

En medio de torbellinos, turbulencias, confrontaciones incruentas y al por mayor, el gobierno del presidente Pérez va avanzando lenta y penosamente. En la práctica parece sostenido por su sola voluntad dura y persistente, por la convicción de muchos sectores estratégicos de que sólo él podría comandar un programa de la envergadura y de los costos del que estaba acometiendo y, finalmente, por la pequeña capa de legitimidad que la conciencia predominantemente democrática del país le otorgaba. La falta de sintonía entre la reestructuración económica y la reforma política y entre aquella y el replanteamiento y puesta en marcha de nuevas políticas y programas sociales, creaba fuertes debilidades y dificultades sin fin para el avance gobernable del «gran viraje». Todo ello con el telón de fondo de un Estado institucionalmente débil y técnicamente inepto para una tarea con las dimensiones de la que tenía enfrente.

Ya para entonces ha calado en el discurso masivo una trilogía letal: la calificación de «neoliberal» para el programa, de «tecnócratas» para sus ejecutores y de «ineficiente y corrupto» para el gobierno. Con este tridente no hay opinión pública que sea sensible a las medidas gubernamentales y a sus resultados. De allí que el crecimiento económico sostenido desde 1990 y la lenta caída del desempleo, más el notable incremento del consumo junto con un control relativo de la inflación, no hayan servido para nada en eso que puede llamarse «recuperación de credibilidad». Especialmente en una circunstancia de casi ilimitada libertad de prensa, la mayoría de la cual es fuertemente crítica con la gestión de gobierno.

Sencillamente porque la crisis tiene muchas expresiones, pero fundamentalmente es de naturaleza política, puesto que su centro lo configuran cambios y reformas cuyas consecuencias últimas serán las de un reacomodo profundo en la estructura de poder de la sociedad venezolana que, aprestándose al nuevo siglo, inevitablemente verá caer determinadas fuerzas, aumentar otras, reacomodarse algunas e, incluso, surgir varias.

1992: 4F/27N/6D

Desde varios años atrás tanto los ascensos en el escalafón militar como la designación del ministro de la Defensa, venían siendo cuestiones llenas de problemas. A éstas se sumaron los temas de «la corrupción dentro de la cúpula militar», lo que provocó cierta separación entre los altos mandos y los intermedios, y el clientelismo militar-político para la obtención de cargos, privilegios y ascensos en las Fuerzas Armadas. Asimismo, el descuido en la formación democrática de los mandos, la persistencia de concepciones de seguridad y defensa militar autoritarias y la alta relación de ósmosis entre la sociedad venezolana y su crisis con el mundo militar, engendró, en éste último, situaciones de franca aprensión hacia el establecimiento político y a la eficiencia del sector público, lo cual estimuló la recuperación de concepciones «regeneracionistas», «salvacionistas», en el interior del mundo castrense.

En medio, pues, de una crisis generalizada en las instituciones del Estado venezolano, 1992 fue el año en el que estalló la crisis político-militar. Primero (4 de febrero) expresada en la insurgencia de mandos intermedios (MBR-200) y, luego, (27 de noviembre), la de algunos altos mandos en paralelo con grupos políticos de izquierda extrema (Bandera Roja, Tercer Camino), con apenas arriago social, pero con alta capacidad de agitación en el caldo bullente de las diversas insatisfacciones de muchos segmentos de la sociedad. Entre uno y otro intento golpista se puso en evidencia otra vez la incapacidad de reacción de la clase política y de sus organizaciones para hacerle frente, en términos de emergencia, a situaciones de excepción. Y, por si faltara poco, se puso en circulación la tesis tanto de provocar la renuncia del presidente como de convocar, adelantadas, a las elecciones generales.

El conjunto de reformas políticas alrededor de las cuales se había creado un verdadero consenso nacional, no fue adelantado con la fortaleza y prontitud del caso. La situación económica, bastante exitosa en lo macro, continúa con importantes limitaciones en lo micro (precios, redistribución del ingreso) e inconclusa en su fase final más importante (reforma tributaria y del sector financiero) con el añadido de un déficit fiscal importante. A todo lo cual debemos añadir la existencia de dos mitos de muy graves consecuencias. Uno es el de la «desaparición de la clase media» y otro es el de la extensión de la «pobreza crítica a casi el 70% de la población». En verdad ha habido una importante distribución regresiva del ingreso y una fuerte desigualdad en el «pago» de los costos sociales y económicos del ajuste. Pero ni la clase media ha desaparecido ni la pobreza extrema nos ha «biafrizado».

Pero tales mitos han actuado como detonantes en las percepciones de una clase con una ubicación absolutamente estratégica (la media) y en las de otra con enorme capacidad de agitación (la marginalidad). Ellos fueron la base permanente de una «alta temperatura» de protesta tanto activa como permanentemente potencial y potenciada.

Con esta especie de «modelo para armar» por delante, el país se enfrentó a sus segundas elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales, apenas una semana después de la asonada militar del 27 de noviembre, controlada con rapidez, pero muy cruenta y estremecedora. Además la opinión pública estaba enrarecida por fuertes controversias partidistas, acusaciones de corrupción, discursos muy opositores de importantes personalidades (el ex-presidente Rafael Caldera, Arturo Uslar Pietri, acaso nuestro intelectual de mayor influencia en la opinión pública). Y de colofón, se había asentado una percepción de inmovilismo, ineficacia y de un sedicente interés - por parte de la élite política - para que nada cambiara.

El 6 de diciembre el mapa político sufrió cambios importantes. Pero, además, arrojó señales de que éstos no han terminado sino, muy por el contrario, se han potenciado de manera mayúscula. COPEI (42% de los votos) gana la mayoría de las gobernaciones (12) y alcaldías. El MAS (15% de los votos, algo menos que en las elecciones anteriores) gana en dos y duplica sus alcaldías. Causa R (4% de los votos) mantiene la gobernación que ya venía ejerciendo, triunfa en la alcaldía más importante, Caracas, y aumenta drásticamente su votación en toda la región central. Acción Democrática (35% de los votos) sufre un nuevo descenso: pierde cuatro gobernaciones y varias alcaldías, entre ellas la de Caracas. La abstención se redujo con respecto a 1989, lográndose ahora una participación electoral cercana al 60%.

Este cuadro tiene un significado y señala varias tendencias. El significado: el proceso de descentralización en que se sumergió el país desde 1990, así como las reformas al sistema electoral (uninominalidad y elección directa de autoridades regionales y municipales), constituyeron un detonante de vasto alcance, al punto que crearon las condiciones reales para un viraje en la correlación política de Venezuela cuyos efectos continuarán por varios años. Esos dos factores fueron «la salida» desde la cual es posible iniciar un proceso de recuperación de las fortalezas para la gobernabilidad democrática, apareciendo como la más importante de ellas el nuevo liderazgo que ha hecho su entrada en escena en las elecciones regionales y locales. Proceso que será largo, sinuoso, duro.

De las tendencias destacamos las que parecen como más valiosas desde el punto de vista político. La primera es que COPEI y AD siguen siendo las grandes fuerzas políticas, aun cuando reducidas; y una de ellas, AD, en descenso relativamente lento pero sostenido. La oposición mejora ostensiblemente sus posiciones institucionales (gobernaciones, alcaldías y concejales) y su votación. Varios grupos ven potenciada su presencia gracias al nuevo sistema electoral (elección directa de gobernadores y de alcaldes y uninominalidad de concejales). El proceso de descentralización se acentuará, así como el de las reformas para ampliar la naturaleza democrática del sistema político.

A los partidos políticos históricos no les queda alternativa distinta a su reconversión según los nuevos valores que la sociedad venezolana apuntala hoy por hoy: transparencia, democracia, liderazgos asentados en eficiencia, decencia y consistencia, las «máquinas» de partido tienen menos poder que los resultados de gestión, ausencia de lealtades políticas duras (hay que ganarlas a cada paso y cada día). Este mapa mucho más abierto acaso disminuya las tensiones antidemocráticas en el sistema político.

El de 1992 fue el año en que verdaderamente vivimos en peligro, donde todos los eventos y señales imaginables de crisis se hicieron presentes sin regateo alguno. Un año sin desperdicio para entender que estamos en un curso turbulento, simultáneo y masivo de cambios, que lleva aparejado un fuerte ingrediente de crisis en su doble sentido: incertidumbre con respecto a los escenarios del porvenir y necesidad de escoger, entre varias, una alternativa para darle rumbo a la reorganización de la sociedad venezolana. Lo cual, sin duda alguna, creará fuertes confrontaciones y obligará a elegir entre cursos distintos de acción y, por tanto, entre intereses y expectativas no siempre conciliables o consensuales.

1994 y CAP, el último reformador

A todas estas entramos en 1993, año que culminará con elecciones generales para la Presidencia y para el Congreso Nacional y las Asambleas Estadales.

Copei aparece con la primera opción, pero cuestionada por el hecho de que su líder fundador - Rafael Caldera - aparece decidido a ser candidato al margen de ese partido y en contra de su secretario general y casi eventual candidato - Eduardo Fernández -. Rafael Caldera - ya presidente en 1969 y que aparece con la primera preferencia en las encuestas -, estaría apoyado por un grupo de copeyanos, por el

MAS y otros partidos menores. Pero, en especial, representaría el frente contra el «status» político («la partidocracia»), expresado en COPEI y AD.

Acción Democrática difícilmente ganará las presidenciales. Incluso no es bueno que lo haga. Sería su tercer período consecutivo en la presidencia (lo cual tensaría los factores de crisis) y pondría de lado su tarea mayor: recuperarse como partido moderno. No obstante, en el peor de los casos obtendrá una buena votación.

Causa R está dispuesta a participar en las presidenciales. Todo indica que tendrá un interesante incremento que, en especial, se traducirá en fuerza parlamentaria.

En todo caso es un cuadro político y electoral en formación, en pleno desarrollo. Su final nos dirá hasta dónde se han consolidado los cambios que 1992 apuntó. En cualquier caso el resultado electoral se prevé relativamente reñido.

Pero ya ésta es otra historia, que comenzará - sin terminar en 1994. Aun cuando, entre tanto, sin vacilación ninguna se puede afirmar, sin que ello deje de suscitar discusiones y desacuerdos, que Carlos Andrés Pérez, CAP, ya entró en la historia venezolana como el último político reformador de este siglo. En su primer gobierno por la nacionalización del petróleo y del hierro, de un modo inaudito: sin violencia y sostenido en un inmenso consenso. Y en éste, su segundo, por los estremecimientos con los que su programa, en muchos sentidos indispensable e impostergable, impactó sobre el modo de hacer las cosas en Venezuela. Al punto de que, en efecto, sus bases políticas, sociales y económicas tradicionales, para bien y también para males, saltaron por los aires - para lo cual, sin duda alguna, contribuyó de modo decisivo el movimiento reformador que, de manera heterogénea, se fue constituyendo en Venezuela desde mediados de los 80 -, abriendo la posibilidad real para que nuestro país ya sea otro - lo cual, desde luego, no nos ahorrará problemas -.

Caracas, enero de 1993